

DICIEMBRE 20 DE 1934

64ª REUNION — 6ª SESION EXTRAORDINARIA

Presidencia del doctor JULIO A. ROCA,
Vicepresidente de la Nación

Ministro presente: de Agricultura, ingeniero Luis Duhau.

Senadores presentes: Alberto Arancibia Rodríguez, Mario Arenas, Rudecindo S. Campos, Ramón S. Castillo, Francisco E. Correa, Francisco R. Galíndez, Laureano Landaburu, Eduardo Laurencena, Lucio López Peña, Juan José Lubary, José Nicolás Matienzo, Pío Montenegro, Alfredo L. Palacios, Robustiano Patrón Costas, Guillermo Rother, Matías G. Sánchez Sorondo, Antonio Santamarina, Carlos Serrey, Lisandro de la Torre, Cruz Vera, Juan R. Vidal, Benjamín Villafañe.

Senador ausente, con licencia: Mario Bravo.

Senadores ausentes, con aviso: Carlos A. Bruchmann, Aldo Cantoni, Raúl Ceballos Reyes, Atanasio Eguiguren, Carlos R. Porto, Horacio Vera Ocampo.

Senador ausente, sin aviso: Mariano P. Ceballos.

SUMARIO

- 1.—Acta.
- 2.—Asuntos entrados.
 - I.—Comunicaciones de la Cámara de Diputados.
 - II.—Comunicación oficial.
 - III.—Peticiónes particulares.
 - IV.—Despachos de comisión.
- 3.—Designación de los senadores Castillo y Laurencena para integrar la Comisión Parlamentaria encargada de estudiar el funcionamiento de la Contaduría del Congreso.
- 4.—Indicación del senador Campos, para tratar el segundo asunto del orden del día número 45.

- 5.—Consideración del despacho de las comisiones de Presupuesto y de Hacienda, en el proyecto de ley en revisión, por el que se crea la Junta Reguladora de Vinos. Se aprueba, quedando convertido en ley.
- 6.—Moción del senador Sánchez Sorondo, fijando el día de mañana para considerar el proyecto de ley, en revisión, sobre unificación de impuestos internos. Se aprueba.
- 7.—Consideración del despacho de la Comisión de Justicia e Instrucción Pública, en el proyecto de ley, en revisión, que dispone que el juzgado letrado establecido en último término en el territorio nacional de La Pampa, tenga su asiento en General Pico. Se aprueba, quedando convertido en ley.

—En Buenos Aires, a los veinte días del mes de Diciembre de 1934, siendo la hora 16 y 15 minutos, dice el:

5

JUNTA REGULADORA DE VINOS

—Se lee:

Honorable Senado:

Vuestras comisiones de Presupuesto y de Hacienda han estudiado el proyecto de Ley en revisión por el que se crea la Junta Reguladora de Vinos; y, por las razones que dará el miembro informante, os aconseja su sanción, con las modificaciones siguientes:

Artículo 4º — Después de la palabra: «créase», se suprime: «por el término de seis años» y se agrega al final del artículo: «que caducará tan pronto como las inversiones que se autorizan se hubieran cubierto.»

Artículo 6º — Después de las palabras: «tres años», se suprime: «prorrogable hasta cinco años por el Poder Ejecutivo.»

Sala de la comisión, Diciembre 18 de 1934.

Robustiano Patrón Costas. — Rudecindo S. Campos. — Matías G. Sánchez Sorondo. — Mario Arenas. — Juan R. Vidal.

PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados, etc.

Artículo 1º — Créase con carácter de emergencia la Junta Reguladora de Vinos, que será designada por el Poder Ejecutivo y funcionará con la colaboración de una Comisión Asesora Honoraria. Las relaciones de la Junta con el Poder Ejecutivo se efectuarán por conducto del Departamento de Agricultura.

La Junta Reguladora de Vinos estará constituida por un presidente, y dos vocales nombrados por el Poder Ejecutivo con acuerdo del Honorable Senado. La Comisión Asesora Honoraria se compondrá de representantes del Banco de la Nación, Banco Hipotecario Nacional, de las provincias y territorios nacionales productores, y demás intereses afectados que serán nombrados por el Poder Ejecutivo nacional, en el número que estime conveniente. Esta Comisión Asesora deberá ser consultada y dictaminará en toda cuestión de carácter fundamental.

Art. 2º — La Junta deberá adoptar las medidas convenientes, para que la producción vitivinícola nacional no siga excediendo los requerimientos normales de la población y su incremento. Con tal objeto queda especialmente facultada:

- Para otorgar previa autorización del Poder Ejecutivo indemnizaciones equitativas, que promuevan la supresión en la medida indispensable de la vid vinífera o su substitución por uva de mesa o de pasas o por otros cultivos;
- Para disponer la compra de uva con destino distinto a la elaboración de vino;
- Para adquirir los excedentes de vino de los bodegueros que se obliguen a recomprarlo cuando la junta decidiese venderlo en la forma que considere más conveniente, a los fines de regular la oferta ajustándola a la capacidad de absorción del consumo. Esta facultad podrá también ser ejercida por la junta, mediante préstamos con garantía de prenda agraria con los recaudos que juzgue necesarios;
- Para concertar convenios con los gobiernos de las provincias productoras de vino, sujetos a la

ratificación definitiva del Poder Ejecutivo nacional, tendientes a la acción coordinada para la consecución de las finalidades antes mencionadas, y las que se propone el artículo 5º de la presente ley;

- Para fijar con carácter obligatorio la época de vendimia en cada una de las regiones vitivinícolas del país, pudiendo aplicar multas hasta de 10.000 pesos a los infractores, según la gravedad de la falta;
- Para promover la agrupación de los productores de uva sin bodega, en entidades cooperativas de acuerdo con la ley número 11.388, para la industrialización y comercialización de sus cosechas.

Art. 3º — Facúltase al Poder Ejecutivo a invertir en las operaciones previstas en el artículo anterior, hasta la cantidad de \$ 30.000.000 m.n., a cuyo efecto podrá hacer las operaciones de crédito que crea necesarias en la medida en que no se empleasen con este propósito fondos provenientes de empréstitos de desbloqueo.

Dicha suma se entregará a la Junta en calidad de adelanto y deberá ser amortizada con el producto de la sobretasa que fija el artículo siguiente.

Art. 4º — Créase, por el término de seis años una sobrecasa adicional de 1 centavo por litro de vino, expedido, cuyo producido, previa la separación de los recursos requeridos por el artículo 9º, se destinará a amortizar las obligaciones contraídas, conforme lo dispuesto en el artículo precedente.

Art. 5º — Durante la vigencia de la sobretasa, la facultad que asista a las provincias productoras de vino de regular la producción a que se refiere el artículo 26, párrafo 3º, de la ley de unificación de impuestos internos, sólo podrá ser ejercida a los efectos de esta ley por el Poder Ejecutivo nacional, el que podrá tomar las medidas necesarias para hacer obligatorias las disposiciones que se dicten en tal sentido.

Art. 6º — A la sobretasa fijada en este artículo le son aplicables todas las disposiciones legales que rigen para el impuesto interno nacional unificado al vino, y será percibido conjuntamente con él. Cualquier nueva plantación de vid vinífera en todo el territorio de la Nación, durante el período de tres años, prorrogable hasta cinco años por el Poder Ejecutivo, pagará un impuesto de \$ 1.000 m.n. por hectárea, cuyo producido se destinará a los mismos fines que la sobretasa creada por la presente ley.

Art. 7º — No podrá indemnizarse a los propietarios de nuevas plantaciones de vid vinífera, efectuadas después de sancionada esta ley.

Art. 8º — A partir de la vigencia de esta ley, sólo podrá elaborarse vino genuino dentro de la provincia o territorio nacional en que se produjese la materia prima empleada.

Las bodegas existentes en la actualidad, situadas fuera de las zonas productoras de uva cuya elaboración anual supere 20.000 hectolitros, podrán seguir elaborando vinos genuinos con uvas traídas de aquéllas, de acuerdo con lo que al respecto establezca la reglamentación de la presente ley.

Art. 9º — La Junta someterá su presupuesto anual de gastos de administración a la aprobación del Poder Ejecutivo, quien lo remitirá al Honorable Congreso para su confirmación, modificación o rechazo, aplicándolo mientras éste no lo haya modificado o rechazado.

Art. 10. — Comuníquese al Poder Ejecutivo.

A. R. FERREIRA.
L. Zavalla Carbó.

Sr. Presidente. — Está en discusión.

Sr. Arenas. — Decía, señor presidente, que las comisiones de Presupuesto y de Hacienda me han confiado informar este proyecto de ley regulador de la producción y el consumo de vinos en la República, exposición en la que tengo que conciliar en la forma más sintética posible lo que debo exponer en nombre de la comisión y algunas aclaraciones complementarias que, como representante de las zonas principales de producción en estas actividades, creo indispensable que conozca el Honorable Senado.

Conviene a los efectos de la mejor apreciación del problema que se plantea y resuelve con este proyecto, hacer una rápida síntesis de lo que importa en la economía nacional la industria vitivinícola: ella provee el consumo total del país con una producción media de más de 700.000.000 de litros de vino. Largo es el camino recorrido a este respecto, si se tiene en cuenta que a la altura del año 1887, casi la totalidad de los vinos que se consumían en la República provenían de la importación de Francia, Italia y España y que en el citado año 87, se introdujeron 108.500.000 litros de vino que importaban más de 30.000.000 de pesos pagados al exterior, con la desfavorable consecuencia previsible para la economía del país.

En el año actual la importación de vinos alcanza a 70.000 litros; el producto extranjero ha sido totalmente desalojado del comercio nacional y aun esta última pequeña partida, puede agregar que se encuentra saldada por la exportación de vinos argentinos al exterior, que alcanza más o menos a una cantidad igual.

Debo hacer notar que la importación del exterior no se ha mantenido aun en los tipos de vinos especiales de grandes marcas francesas, como el champagne, por ejemplo, que en los últimos años ha sufrido también el mismo contraste, pudiendo decirse que en la actualidad el consumo de dicha clase de vinos, es de industria exclusivamente nacional.

La superficie plantada de viña en la República, según las estadísticas, alcanza a 152.000 hectáreas. Lo probable es que pasen de 160.000, porque debe haber en el país alguna disimulación del área plantada, en virtud de la mayor cantidad de impuesto que se paga por la tierra con viña, en los sitios de producción.

Considerando estas 160.000 hectáreas a un precio mínimo de 3.000 pesos, importa la viña de la República alrededor de 500.000.000 de pesos invertidos.

Las cinco mil bodegas inscriptas en impues-

tos internos tienen una capacidad de 15.000.000 de hectolitros, y con un cálculo prudente y bajo, del valor de capacidad por hectolitro que alcanza más o menos entre \$ 12 y \$ 15, pasa el valor de los establecimientos industriales de 200.000.000 pesos.

Las maquinarias y los demás implementos para la elaboración de la uva, las construcciones auxiliares, etcétera, suman fácilmente más de 150.000.000 de pesos, vale decir, que la industria vitivinícola en el país tiene como capital alrededor de 1.000.000.000 de pesos.

Si consideramos que las regiones productoras especialmente dedicadas a esta actividad, las provincias de Mendoza, San Juan y territorio de Río Negro, tienen una población aproximada de 700.000 habitantes que viven de la industria, agregándose a esto el personal del comercio de los vinos, el de las industrias derivadas, los empleados de transportes, etcétera, suman alrededor de 300.000 habitantes más; puede decirse que trabajan y encuentran la satisfacción de sus necesidades en la República, alrededor de la actividad de la industria vitivinícola, cerca de 1.000.000 de habitantes.

Traduciendo estas cifras en otros valores, la producción vitivinícola nacional ha alcanzado hasta 200.000.000 de pesos como valor anual de la producción en sus mejores épocas. Quedan dos cantidades constantes que algo revelan de la importancia de estas actividades: los impuestos que se pagan, que llegan alrededor de 40.000.000, y los fletes, especialmente del Ferrocarril Pacífico, que centraliza la mayor parte de la producción de las regiones más importantes de San Juan y Mendoza, que insumen cerca de 35.000.000 de pesos.

Me ha parecido indispensable este rápido balance para que el Honorable Senado y el país, aprecien debidamente el volumen de la industria, que por primera vez aparece en el escenario nacional ocupando el sitio que le corresponde al lado de los cereales y de la ganadería, que han monopolizado con anterioridad la atención del gobierno, con sus necesidades, sus vicisitudes y los éxitos de su vida joven.

—Entra al recinto y ocupa su banca el señor ministro de Agricultura, ingeniero don Luis Duhan.

Para apreciar las sombras de este cuadro, después de haber exhibido los relieves, vamos a analizar sumariamente la situación actual.

Ella se resiente de las dificultades y angustias que ha soportado y soporta la economía del país y que, a su respecto, se traducen especialmente en una disminución considerable del consumo y, como consecuencia forzosa, en un exceso de producción que se ha ido acumulando y que representa casi una cosecha; lo que ha producido fatalmente el derrumbamiento de los precios en una medida sin precedentes en los 60 ó 70 años de la vida de la industria.

Se calcula que al 1º de Septiembre de 1935, fecha en que empieza el año vinícola, en virtud de un decreto del Poder Ejecutivo nacional que prohíbe la salida de los vinos nuevos del año hasta esa fecha, habrá un excedente de vinos viejos de las cosechas anteriores depositados en bodega, de unos 430.000.000 de litros. A esta cifra debe sumarse la cosecha próxima del año 1935, que empieza en Febrero y que normalmente produce una cantidad de 700.000.000 de litros, con lo que al 1º de Septiembre de 1935, habrá una existencia total de vino de 1.130.000.000 de litros.

El consumo normal del país, por las causas a que acabo de hacer mención, no pasa de 600.000.000 de litros, lo que importa, al 1º de Septiembre de 1935, un exceso o stock, de una cantidad aproximada a la que necesitará el consumo. En otros términos, habría un sobrante de una cosecha, más o menos, como stock o arrastre de la disminución del consumo, en virtud de las circunstancias por que atravesamos.

Este proceso de acumulación se ha venido consolidando gradualmente en una serie de años, en especial en los últimos cinco, con la caída consiguiente de los precios y, por último con las ventas a pérdida, que han privado a los productores de los recursos indispensables para subvenir a sus gastos y al pago de sus obligaciones, situación extraordinariamente agravada por la disminución creciente de las ventas.

Esto ha traído un fenómeno grave en la industria: la absoluta descapitalización de la misma. Los gastos y las obligaciones bancarias no se han podido solventar; las deudas han crecido enormemente a tiempo que se depreciaba el producto y en la actualidad los establecimientos industriales, tras de una serie de años malos, están al borde de una verdadera catástrofe.

Como fenómeno paralelo, el precio de las uvas de vinificar ha sufrido las mismas vicisitudes y los viñateros han llegado al extremo de no obtener rendimiento suficiente ni siquiera para mantener los cultivos, haciendo omisión de sus gastos personales y de los intereses y amortizaciones de sus deudas.

Esta situación se agrava más todavía en es-

tos momentos, porque la existencia de vinos impide, por falta de capacidad de las bodegas, elaborar la mayor parte de la cosecha pendiente, que se iniciará a mediados de Febrero del año próximo.

Por otra parte, los establecimientos industriales no cuentan con los recursos ni con el crédito necesario para elaborar; y lo que es más grave, no tienen ningún interés en ello, puesto que tienen almacenados en sus depósitos, vinos para subvenir a las necesidades del consumo, y como están vendiendo a pérdida, no tienen ningún aliciente en invertir nuevos capitales para elaborar la cosecha venidera.

A este respecto, es conveniente aclarar con cifras la situación de los bodegueros. El producto que en la actualidad expenden al consumo, tiene un precio de costo más o menos de 7 centavos, y las ventas, por el exceso de oferta, llegan a un término medio de 4 centavos, vale decir, que en cada venta que hace el bodeguero, está perdiendo 3 centavos por litro, de capital ya invertido en elaborar el producto.

No entraré a precisar lo que esto importa para las regiones vitivinícolas, si tal secuela de cosas continúa. Para hombres que, como los miembros del Senado, están versados en esta clase de asuntos, es fácil comprender las consecuencias que puede traer tal estado de cosas.

Debo sí remarcar que la provincia de Mendoza, que expende al consumo de la República alrededor de 40.000.000 de litros por mes, está perdiendo 3 centavos por cada litro, y que cada mes que transcurre, sufre la industria una descapitalización que excede de 1.500.000 pesos.

A esta altura del informe, surge la pregunta, de cómo se ha podido llegar a tales extremos.

Es evidente que la causa fundamental es el desequilibrio entre la producción y el consumo; e interesa establecer por el momento, cuál de estos dos factores es el determinante.

Es indudable que la crisis tan aguda que soporta el país, incide desde hace algunos años sobre la capacidad de adquisición de los consumidores, lo que importa un factor fundamental de la disminución del consumo.

Con ser muy apreciable este factor en general, hay otros que circunstancialmente gravitan con mayor intensidad sobre la industria, entre ellos la doble, triple y hasta cuádruple imposición fiscal que pesa sobre los vinos en todo el territorio de la República, encareciendo extraordinariamente el producto, y constituyendo en algunos casos un gravamen prohibitivo del consumo.

Las dificultades fiscales después de la guerra europea, principalmente por la desaparición del crédito internacional, indispensable en países jóvenes, sin ahorro y sin el capital suficiente; dado el enorme crecimiento de los gastos públicos, especialmente en los últimos 15 años, han llevado al límite máximo la imposición fiscal, en términos de ahogar en la práctica a la industria vitivinícola y a la producción.

Un breve estudio de los impuestos que gravan el vino, dará la luz necesaria para apreciar en qué grado este factor ha contribuido a crear las dificultades actuales que, en mi concepto, emanan fundamentalmente de esta causa. En 1920, se principió a crear y acrecentar considerablemente estos gravámenes; aquí las primeras dificultades de la industria. Mendoza y San Juan, las provincias principalmente productoras, acuden a esta fácil fuente de renta y los impuestos llegan en la primera, a 6 centavos por litro y, en la segunda, a 8 centavos. Las demás provincias, a la altura del año 1925, han creado, sin excepción, tasas impositivas sobre los vinos que alcanza una recaudación general en ese año 1925, de 10.000.000 de pesos, y que en el año 1929 permitía una recaudación de las provincias no productoras, de 15.000.000 de pesos, por los gravámenes a los vinos de la región de Cuyo.

El consumo se principió a reducir apreciablemente y los precios que en el año 1926 llegan a 30 centavos por litro en bodega, se han reducido el año 1929 a la mitad. Desde el año 1929 al actual de 1934, caen esos precios a 4 centavos; en siete años, los precios han descendido un 90 por ciento.

Para darnos cuenta exacta de la causa y el efecto, examinemos la imposición fiscal en otras provincias, fuera de las que son productoras. La provincia de Tucumán grava el consumo de vinos comunes con 8 centavos por litro, en concepto de impuestos provinciales, y 8 centavos más como retribución de tasa municipal. Los vinos embotellados pagan 20 centavos de impuesto por botella.

En la provincia de Santiago del Estero se crea un impuesto, que está en vigencia en la actualidad, de 7 centavos por litro. En la provincia de Jujuy, el año 1930, alcanza el impuesto a 15 centavos por vino común y a 30 centavos de impuesto por vino embotellado.

En la provincia de La Rioja, el año 1933, el impuesto llega a 10 centavos sobre los vinos de producción de fuera de la provincia.

Sumando los impuestos locales de las provincias productoras a los impuestos creados por las provincias consumidoras, con más medio centavo de impuesto nacional, resultan, en la práctica totalmente cerradas al consumo de vinos de Mendoza y San Juan, cinco provincias de la República, de las 14 que componen su unidad.

Esas 5 provincias de la República tienen, más o menos, una población de 1.000.000 de habitantes, y por la verdadera barrera aduanera que se ha creado, no se consumen vinos nacionales excepto la escasísima producción que algunas tienen de vinos propios.

Más de una tercera parte de la extensión de la República cerrada al consumo de vinos nacionales, en los últimos años, es lo que trae una disminución que pasa de 400.000 bordelesas, en el consumo normal, que esas provincias hacían con anterioridad a los impuestos al consumo. Pasemos a las otras provincias, que en un grado menor también han gravado el producto.

La provincia de Buenos Aires lo ha gravado con 4 $\frac{1}{4}$ centavos, término medio; Santa Fe, 3 centavos; Córdoba, 5 centavos el vino común y 10 centavos el embotellado; Entre Ríos, 3 centavos; Corrientes, 4 centavos y embotellado, 5; San Luis, 5 centavos; Catamarca, 5 centavos y el embotellado 10 centavos.

Entre los gravámenes se encuentra también el más liviano de todos, que es el impuesto nacional, que grava los vinos con medio centavo el litro y 10 centavos por hectolitro, bajo la denominación de derecho de análisis, lo que suma 60 centésimos por litro.

Decía que el gobierno nacional es el que menos grava los vinos en la actualidad, sin que esto quiera decir que inmediatamente que principió a desarrollarse la industria en el país, a la altura del año 1898, no lo gravara, pues le impuso 4 centavos por litro, impuesto que debió derogarse al año siguiente, porque había disminuído considerablemente el consumo.

En la actualidad, los impuestos que gravitan sobre el vino llegan, término medio, a 10 centavos y en esto radica la causa de la disminución del consumo actual, aparte de lo que naturalmente se produce por efecto de las dificultades económicas del momento.

Algún tiempo la industria vitivinícola ha estado exenta de impuestos nacionales, hasta el año 1915, en que se sancionó $\frac{1}{4}$ de centavo, que luego se elevó a medio por el Gobierno Provisional, bajo la promesa de crear un control, indispensable en el mercado de consumo, para evi-

tar el desdoblamiento de vinos, impuesto que se cobra desde hace cuatro años, a base de un control que no se ha realizado hasta la actualidad.

Creo que los impuestos son el principal factor de la disminución del consumo de vinos nacionales, sin que dejen de tener su parte otros factores, como los fletes. Los ferrocarriles, con una disminución considerable del volumen del transporte, no han podido seguir las penurias de la industria con una rebaja de los fletes, aparte de las circunstancias especiales que obran en algunas regiones del país que, como Mendoza, tienen canalizada toda su exportación de vinos por las vías del Ferrocarril Pacífico, lo que ha permitido a éste hacer pagar a la provincia de Mendoza, los fletes más caros que se pagan en el país por este artículo, y aun competir con los ferrocarriles nacionales, rebajando el flete para la provincia de San Juan, que está servida por la red de los Ferrocarriles del Estado. A 150 kilómetros más de distancia, San Juan, sobre Mendoza, tiene fletes menores a Buenos Aires, que de Mendoza a Buenos Aires. Hay una dirección de ferrocarriles que se encontraría en graves dificultades para explicar estas extraordinarias tarifas parabólicas que permiten, no una disminución proporcional de los fletes a más largos recorridos, sino fletes menores a más largos recorridos que lo que se paga por recorridos más breves, sobre todo cuando esta maniobra es para competir con los Ferrocarriles del Estado.

Otro factor de dificultades, de encarecimiento del producto y, en consecuencia, de disminución de consumo, lo constituye la depreciación de nuestra moneda con respecto a todos los artículos que la industria debe adquirir del exterior, especialmente las bordelesas, que en tiempos normales costaban alrededor de doce pesos, y que hoy cuestan veinte pesos, y que se importaban especialmente de Norte América, y digo importaban, porque al precio de veinte pesos por bordelesa, ha resultado también prohibitivo el consumo de una bordelesa de roble de Estados Unidos, y se están ensayando en la actualidad algunas maderas del país, que pueden proporcionar a la industria envases más o menos al precio anterior, doce pesos la bordelesa nueva. Habrá que fomentar y proteger esas fábricas que emplean madera y personal del país.

Es indudable que la escasez de bordelesas, — porque desde hace tres años no entran bordelesas norteamericanas — ha levantado el precio de la ya usada, encareciendo necesariamente el producto que se transporta en ellas.

Con respecto a los productos enológicos necesarios para la industria y que no produce el país, conviene hacer una aclaración, y es que el principal producto enológico que se usa en la vitivinicultura nacional, es el ácido tartárico, que no es más que una concentración de sales propias de los vinos, que no elaboramos en el país, por no tener aún las fábricas indispensables, y se traía especialmente de España y de Alemania, en los últimos años. Este producto, por la depreciación de la moneda, ha subido al doble de su valor.

Toda la maquinaria y demás implementos han sufrido la misma alza de precios, encareciendo por consiguiente el producto.

Se explicará ahora, por qué en la actualidad se encuentra abocada la industria a la situación de desastre de que hacía mérito hace un momento.

Han contribuido también a esta mala situación, algunas medidas tomadas por los intereses afectados y en algún caso con apoyo de los gobiernos locales, para defender la caída de los precios que fatalmente resultaba de la falta de consumo, porque sin penetrar las verdaderas causas creyeron que disminuyendo la oferta iban a poder levantar los precios, sin ver que las causas eran más complejas y más graves, porque levantar los precios no era posible sin seguir cerrando las puertas al consumo.

La Compañía Vitivinícola de Mendoza ha sido uno de los factores de disminución del consumo, porque pretendió levantar los precios del vino al nivel de los que en situaciones más amplias se consiguen, sin haber pesado todas las circunstancias complejas que estaban obrando y encareciendo el producto, especialmente el escaso poder de compra de la plaza.

Se ha sostenido por muchos, que la causa de la disminución del consumo y de la caída de los precios, es un exceso de producción. No comparto ese criterio. Con la población del país y apreciando en una forma baja el consumo por habitante, la producción de vinos sería inferior a las necesidades del mismo; es conveniente precisar con cifras.

La República había alcanzado antes de la situación presente, un consumo «per cápita» de más o menos 60 litros; este consumo insuirmía toda la producción actual. Pero el consumo de 60 litros bajó hasta 33 litros en el año 1932; subió un poco en el año 1933 y ahora es probable que llegue a más de 45 litros por habitante, lo que implica un repunte que puede atribuirse a los precios más bajos.

Si se considera que en otros países vitivinícolas, como Francia, se consume término me-

Diciembre 20 de 1934

dio 150 litros por habitante, en Italia 120 litros y en España 100, la cantidad de 60 litros «per cápita» que se puede asignar al consumo de nuestra república, — que ya ha alcanzado en circunstancias normales — no es una cifra exagerada, ni imposible de volver a alcanzar, desapareciendo los factores que están actuando en la depresión actual. Por eso asigno a estos otros factores que he enumerado anteriormente, una acción más fundamental en la disminución del consumo y la caída de los precios y, como consecuencia, la situación difícil por que atraviesa la industria.

Tal situación de la industria vitivinícola llegó, como era forzoso, al Poder Ejecutivo nacional, solicitando el concurso que creía necesario y el gobierno, después de un estudio previo de este asunto, remitió al Congreso el proyecto de ley que en este momento estamos tratando, ley fácil de interpretar después de las explicaciones precedentes.

Hay un exceso de producción que se agravará en la cosecha próxima; es indispensable levantar los precios para que los industriales no vayan a la ruina siguiendo con las ventas a pérdida; es indispensable eliminar el stock que está gravitando con la excesiva oferta sobre las plazas de consumo. De allí que la ley reguladora prevé una compra a precios limitados del stock, para eliminarlo de la plaza y permitir de esta manera que los industriales puedan sacar siquiera el precio de costo. Pero como la cosecha pendiente puede volver a reproducir ese stock, es indispensable eliminar una parte de esa uva, y de esta manera, no elaborándose en su mayor parte la nueva cosecha, podría salirse de la cantidad de vino que hoy se compra para aliviar el mercado, paulatinamente, en un término más o menos largo, que no pasará de dos años.

En éstos no habría pérdida ninguna, ya que la propia extracción del stock de la plaza, importa levantar los precios y, en consecuencia, ese stock podrá venderse gradualmente, no con ganancia para el gobierno, porque eso no entra en sus propósitos, sino salvando los gastos.

Es previsible que los precios al consumo, si el stock que se compra se pagará a 5 centavos, suban a 7; lo que importa que el Estado podrá vender a 5 $\frac{1}{2}$, con los intereses y gastos, en un tiempo más o menos previsible, mientras funcionan los dos principios de la regulación: comprar el stock y el exceso de uva, para evitar que el stock se repita.

Pero ésto, que seguramente puede regularizar la situación de la industria, es posible que

no sea suficiente y entonces el gobierno ha previsto el caso de que sea necesario arrancar viñedos para disminuir la producción, medida drástica fundamental, que sorprende entre nosotros, pero que viene aplicándose desde hace varios años en otra regiones vitivinícolas, especialmente en Francia, en Argelia, en Túnez. España e Italia han dictado leyes del mismo tipo que, por lo menos, como ésta, impiden plantar nuevos viñedos.

Si los dos factores que se usan para equilibrar el consumo, compra del stock y disminución de la elaboración de uvas, no dieran el resultado necesario, se aplicará la segunda parte del proyecto del gobierno, que es el arrancar viñas. De allí que el artículo 1º de la ley provea las autoridades que deben aplicarla y constituya un tribunal de tres personas, simple, rápido, porque la circunstancia de que la cosecha pendiente deba empezar a hacerse a fines de Febrero, requiere proceder sin pérdida de tiempo en este asunto.

El artículo 2º, prevé las facultades y el plan que debe desarrollar la comisión, la compra de vinos y la compra de uvas. La compra de vinos para revender a los propios interesados y la compra de uvas, en dos formas, para facilitar la realización de estas operaciones, que serán múltiples e importantes. Compra de fruto al bulto, como se llama en las regiones productoras, y por hectárea, y compra de uvas al peso. La compra de uvas por hectárea, que se hará por un límite bajo, permitirá a los que tienen escasa producción, vender en esas condiciones, evitando el tener que pesar, controlar ese peso y demás. Los propietarios estimarán lo que más les conviene, vendiendo al bulto o al peso.

La uva que se compra no está destinada a perderse fatalmente, aunque en mucha proporción vaya a ocurrir así este año, en virtud de no haber tiempo para preparar la organización de las fábricas indispensables para producir derivados, zumo de uva verde, arroje, jugo de uva, alcohol, etcétera. Si fuera necesario comprar uva de la cosecha de 1936, para evitar el exceso o stock, ya en ese año será posible aprovechar totalmente la uva que se compre, en otras industrias sucedáneas.

El artículo 3º de la ley prevé los recursos, 30.000.000 de pesos como suma máxima, de los que previsiblemente se emplearán 20.000.000, salvo que contra todo lo que se espera, con la desaparición de los gravámenes provinciales y algunos otros inconvenientes que se salvarán con la ley de vinos, y, especialmente, con la ley de

unificación de impuestos internos, no se consiguiera el beneficio que se cree suficiente, para que en 2 ó 3 años la industria se haya equilibrado.

El artículo 4º establece la financiación de la ley. Se hace por la propia industria, con una sobretasa de un centavo sobre el impuesto nacional, sobretasa que debe desaparecer tan pronto como los gastos de la ley se hubieran cubierto.

Debo manifestar al Honorable Senado, que las comisiones de Presupuesto y de Hacienda han resuelto desistir de las modificaciones introducidas en la sanción de Diputados, que figuran en el orden del día que está a consideración, en razón de tener la seguridad de que si estas leyes se modifican, tanto la de unificación de impuestos internos como la ley reguladora de vinos, no podrían quizá ser sancionadas oportunamente por la Cámara de Diputados y se producirían indefectiblemente perjuicios que se desea evitar. Hago, en nombre de las comisiones de Presupuesto y de Hacienda, el retiro de las modificaciones, a objeto de que esta ley se apruebe, si es posible, como fué sancionada en la Cámara iniciadora.

El artículo 6º prevé una condición indispensable, ya que se va a eliminar sobrante de uva, para evitar la superelaboración y ya que se prevé el arrancar viñas; como una consecuencia lógica se establece la prohibición de plantar y se adopta la forma de un impuesto de 1.000 pesos por hectárea, para evitar las nuevas plantaciones durante la vigencia de esta ley.

Es evidente que si la ley contempla aún el caso de arrancar viñas, hay que empezar por prohibir su plantación, porque no se puede permitir que por un lado se planten viñas y por otro se destruyan contemporáneamente.

Por otra parte, esta medida que, en su aspecto legal resulta un tanto violenta, no ofrece, por ahora, ninguna duda de aspecto jurídico, ya que esta disposición es del tipo clásico, de las medidas de emergencia que impone la necesidad del país; y a propósito de lo cual hace poco tiempo la Suprema Corte de la Nación ha resuelto el caso con respecto a la ley de moratoria hipotecaria, que es mucho más importante que ésta, confirmando la teoría que se sostuvo y primó en el Senado: de que las facultades de policía en los casos de emergencia y de necesidades públicas generales, deben primar sobre el criterio que establecen las leyes ordinarias del país, y en un tiempo limitado y por circunstancias especiales de gravedad.

La disposición estableciendo en el hecho

una prohibición de plantar por tres años, es exactamente del tipo de la ley de emergencia, de tiempo determinado y por una necesidad de carácter público y urgente.

Se agrega a la ley algunas otras disposiciones complementarias, sobre las cuales daré a los señores senadores, al tratarse el proyecto en particular, todos los datos que consideren necesarios.

Y para terminar, señor presidente, debo decir algunas palabras a propósito de esta industria vitivinícola nacional, que no está juzgada en general en el país, atribuyéndole la función social que realmente tiene.

Es un concepto común, que los que consumen bebidas con alcohol, son alcoholistas. Científicamente, el alcoholista es el que sufre una lesión permanente de alguno de sus órganos por efectos del alcohol. Socialmente, el Estado tiene interés en evitar que se produzca una lesión por efecto del alcohol. No tiene ningún interés en impedir que se consuma el vino porque es una necesidad que se observa en toda la humanidad con carácter imperativo: la necesidad de estimulantes, que los ha creado la excesiva actividad de los tiempos actuales y que se viene comprobando desde hace mucho tiempo atrás en la vida de los pueblos.

En tiempos viejos, el vino era uno de los mejores estimulantes. Se incorporó después el alcohol industrial, más peligroso cuanto más concentrado, porque la destilación del alcohol produce una bebida mucho más tóxica; se generalizó después el uso del azúcar, gran estimulante nervioso, el té y el café. En Francia, cuando la filoxera, en 1893, redujo la producción de vinos a la cuarta parte, el uso del alcohol industrial, producido de la destilación de otras sustancias vegetales, se generalizó con una manipulación especial, el ajenojo, de resultados tan desastrosos, que el país debió prohibir por ley su producción y su consumo, volviendo al vino como estimulante, para evitar, precisamente, los alcoholes tóxicos. El azúcar, el té, el café y el vino son los estimulantes más inocentes que usa hoy casi uniformemente el mundo entero; la supresión de ellos o la dificultad de conseguirlos, especialmente el vino, trae como consecuencia el uso de otros estimulantes más fuertes, como el opio, todos los alcaloides, los alcoholes industriales bajo diferentes formas, y el tabaco. Los inocentes, como he dicho, ingeridos en cantidad prudente, no sólo son necesarios, sino que evitan el uso de bebidas tóxicas.

Porque ha sido observado que la supresión de algunos de estos estimulantes, especialmente

del vino, ha traído como consecuencia inmediata, el uso de otras drogas, con resultados desastrosos como en el pasado de Francia; pero conviene, a este respecto, hacer una referencia a la situación actual. La prédica contra los vinos, en realidad contra el alcoholismo, por falta de un estudio científico verdadero, ha arrastrado a algunos países a prohibir su consumo.

Estados Unidos ha experimentado la prohibición durante 15 años; también Suecia y Noruega y algunos otros países. Según los diarios últimos, Islandia ha derogado también su ley seca. ¿Por qué? En Estados Unidos, país de 120.000.000 de habitantes, la ley seca debía llenar una enorme función de importancia social: el Estado había prohibido el consumo de vinos para evitar el alcoholismo. Había quintuplicado los gastos para el control y teniendo que crear una verdadera flota para perseguir el contrabando. Llega un momento en que los hechos le indican que todos esos gastos no sólo eran inútiles, sino que hasta resultaban perjudiciales.

¿Por qué? Porque durante la vigencia de la ley seca, el alcoholismo, es decir los lesionados por el uso del alcohol, había progresado en proporción de uno a quince, y que Estados Unidos, país no alcoholista, se había hecho alcoholista, llenando sus manicomios, asilos y hospitales de enfermos lesionados por los males que produce el alcohol. Tal experiencia como esta se ha hecho en Noruega y en Suecia al igual que en Francia, en el caso recordado, cuando la filoxera destruyó los viñedos y se recurrió a los alcoholes industriales, en la forma de ajenojo, para satisfacer la necesidad de estimulantes.

La ley seca no se ha derogado en Estados Unidos como resultado de una propaganda política, sino por el consejo de una comisión de técnicos que estiman que para evitar el alcoholismo, lo mejor es restablecer el consumo del vino.

He querido, señor presidente, hacer estas referencias no como apología del producto de la región a la cual pertenezco y me vinculan intereses de todo orden, sino como una exposición necesaria, porque el concepto común sobre esta industria, es el de una protegida indeseable y no de una industria que desarrolla sus actividades legítimas y llena una necesidad imperiosa del consumo del país, con beneficios sociales que no se aprecian debidamente por falta de información y estudio.

Con esto, y ofreciendo las aclaraciones que crean necesarias los señores senadores, dejo in-

formado el proyecto de ley de regulación de vinos.

Sr. Presidente. — Si no se hace uso de la palabra, se va a votar en general el despacho de la comisión.

—Se vota y resulta afirmativa.

Sr. Presidente. — En consideración en particular.

—Sin observación, se votan y aprueban los artículos 1º, 2º y 3º del despacho.

—Se lee el artículo 4º del proyecto en revisión.

Sr. Presidente. — En discusión.

Sr. Arenas. — Pido la palabra.

La modificación que había introducido la comisión a este artículo era precisando que la sobretasa que se establece en el mismo, es solamente para cubrir la amortización del capital que se emplee, sus intereses y gastos y que esa sobretasa dejará de cobrarse inmediatamente que estos servicios sean cubiertos; pero no hay ningún inconveniente en dejar la redacción primitiva, ya que ha sido suficientemente aclarado en las comisiones por los señores ministros de Hacienda y de Agricultura, que el propósito del texto del artículo 4º, no podía ser otro, ya que se establecía sólo a los efectos de esta ley, sin propósitos fiscales y que debe entenderse caducar, cubiertos los gastos previstos.

Con esta explicación, el sentido del artículo queda precisado, y no presentará inconvenientes para el porvenir. Es muy posible que la producción en seis años sea muy superior a los gastos que se hayan realizado, y como no se trata de una sobretasa de propósito fiscal, deberá caducar inmediatamente que estos gastos queden cubiertos.

Nada más.

—Se vota el artículo 4º del proyecto en revisión, y resulta afirmativa.

—Se lee y aprueba sin observación el artículo 5º.

—Se lee el artículo 6º, del proyecto en revisión.

Sr. Laurencena. — Deseo que quede constancia expresa de mi voto en contra de este artículo.

Diciembre 20 de 1934

CAMARA DE SENADORES

64ª Reunión. 6ª Sesión extraordinaria

Sr. Presidente. — Así se hará, señor senador. Se va a votar el artículo 6º.

—Se vota y aprueba, como así también los artículos restantes del proyecto.

Sr. Presidente. — Queda convertido en ley.

6

UNIFICACION DE IMPUESTOS INTERNOS.— MOCION

Sr. Sánchez Sorondo. — Pido la palabra.

Pediría al Senado que fije el día de mañana para considerar el proyecto de ley de unificación de impuestos internos. Hago moción en ese sentido.

Sr. Laurencena. — Pido la palabra.

Propongo que el proyecto a que acaba de hacer referencia el señor senador por Buenos Aires, se trate el lunes próximo en sesión especial, porque en la de mañana podrían considerarse varios asuntos que han tenido recién entrada en la sesión de hoy, pudiendo diferirse la consideración del proyecto sobre unificación de impuestos, que es de mucha importancia, hasta el día lunes.

Sr. Sánchez Sorondo. — El inconveniente de la moción del señor senador, es que, probablemente, será difícil conseguir quórum para el lunes. Por esa razón yo mantengo mi moción, señor presidente.

Sr. Presidente. — Se votará en primer lugar la del señor senador por Buenos Aires, de tratar en el día de mañana el despacho de la Comisión de Presupuesto sobre unificación de impuestos internos.

—Se vota, y resulta afirmativa.

7

ASIENTO DEL JUZGADO LETRADO DE LA PAMPA

—Se lee:

Despacho de la comisión

Honorable Senado:

Vuestra Comisión de Justicia e Instrucción Pública ha tomado en consideración el proyecto de ley enviado en revisión por la Honorable Cámara de Diputados, por el que dispone que el juzgado letrado establecido en último término,

en el territorio nacional de La Pampa, tenga su asiento en General Pico, con jurisdicción en las secciones I, VII, y letra B de la sección II; y, por las razones que dará el miembro informante, os aconseja su sanción.

Sala de la comisión, Diciembre 11 de 1934.

Francisco R. Galíndez. — Alfredo L. Palacios.

PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados, etc.

Artículo 1º — El juzgado letrado establecido en último término en el territorio nacional de La Pampa tendrá su asiento en General Pico, con jurisdicción en las secciones I y VII y letra B de la sección II. Los dos juzgados letrados con asiento en Santa Rosa de Toay tendrán jurisdicción sobre el resto del territorio.

Art. 2º — Trasládanse de Santa Rosa de Toay a General Pico un procurador fiscal y un defensor de pobres, incapaces y ausentes, que el Poder Ejecutivo determinará.

Art. 3º — Habrá tres escribanos secretarios encargados de actuar en los juicios que se sigan ante el juzgado letrado de General Pico, con igual personal y asignaciones para sueldos y gastos.

Art. 4º — El Poder Ejecutivo instalará y habilitará una cárcel de encausados en General Pico. A ese efecto, se aumentará el personal de cárceles de territorios (inciso 73) del ítem 1º en un auxiliar 4º, un ayudante mayor, dos ayudantes principales, dieciocho ayudantes primeros, y del ítem 3º, en dos ayudantes primeros. Asígnase la suma de trescientos pesos moneda nacional mensuales para alquiler de la casa, la de dos mil pesos moneda nacional mensuales para racionamientos y otros gastos y la de ocho mil pesos para gastos de instalación, por una sola vez. Asimismo se asigna la suma de mil quinientos pesos para gastos de traslación y de instalación del juzgado y oficinas de los demás funcionarios.

Art. 5º — Los asuntos civiles y comerciales que se hallaren en trámite en la fecha de instalación del juzgado de General Pico y que le correspondieran en razón de jurisdicción territorial, les serán remitidos si las partes expresaran su conformidad en el expediente dentro de los treinta días de esa fecha. Los procesados en causas criminales o correccionales en trámite, podrán manifestar su voluntad al mismo efecto